



NUE 301-A-2019 (LS)

Pereira Joya contra Universidad de El Salvador (UES)

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veinte.

Descripción del caso

1. El presente procedimiento tuvo origen en el recurso de apelación interpuesto por **Santos Fredis Pereira Joya** en contra de la resolución de referencia 240-2019, emitida el por la Oficial de Información de la **Universidad de El Salvador (UES)**, en donde se tramitó el acceso a información correspondiente a la Facultad de Ciencias Económicas (en adelante FCE) de dicha universidad, según detalle:

1. *Plan de acción para la actualización de los planes de estudio de la FCE.*
2. *Informe de avances en la actualización de los planes de estudio de la FCE.*
3. *Plan de desarrollo de la FCE.*
4. *Memoria de labores de la FCE, período 2015-2019.*
5. *Listado y montos de las plazas que están generando economías de salarios en la FCE, período enero-diciembre de 2019.*
6. *Destino que se ha dado a las economías de salarios, distribuidas por montos y usos, en el período de enero-diciembre de 2019.*
7. *Nombre y cargo de los responsables de establecer la propuesta de agenda de las sesiones de Junta Directiva de la FCE.*
8. *Copia de las convocatorias y agendas propuestas para las sesiones de JD de la FCE para el período de enero-diciembre de 2019.*
9. *Cantidad de solicitudes pendientes de conocer por parte de la Junta Directiva de la FCE, para el período de enero-diciembre de 2019.*

[Firma manuscrita]



10. Cantidad de solicitudes que están pendiente de resolución por parte de Junta Directiva de la FCE, para el período de enero-diciembre de 2019.

11. Nómina de Miembros Propietarios y Suplentes de la Junta Directiva de la FCE de los períodos 2017-2019 y 2019-2021.

Al respecto, la Oficial de Información de la **UES** resolvió proporcionarle respuesta a solicitud de información anteriormente descrita, por medio de la nota suscrita por el Licenciado Nixon Rogelio Hernández, Decano de la FCE, de fecha 5 de diciembre de 2019, mediante la cual remite: listado de miembros de Junta Directiva, se expresa lo relativo a las memorias de labores, emisión de resoluciones y economías de salarios (folios 12-13 del expediente administrativo remitido, 240-2019).

Por su parte, el apelante se mostró inconforme en tanto considera que le han entregado información incompleta, que no corresponde a lo solicitado, y en la que hace referencia al sitio web del Portal de Transparencia de la referida facultad, donde no se encuentra la información solicitada. Por ello, interpuso recurso de apelación en base a los Arts. 82 y 83, letra “d”, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

II. En consecuencia, este Instituto admitió el recurso y designó a la entonces Comisionada Olga Noemy Chacón de Hernández, para instruir el presente procedimiento y elaborar el proyecto de resolución; sin embargo, el caso fue posteriormente reasignado al Comisionado **Luis Javier Suárez Magaña**, a quien se le encomendó continuar y finalizar tal función.

En observancia al derecho de defensa y audiencia, imperante en todo procedimiento administrativo y de conformidad con el Art. 88 de la LAIP, se corrió traslado a la UES, para que rindiera su informe justificativo. Dicho informe fue rendido por Raúl Ernesto Azcúnaga López, en su calidad de Rector en funciones y representante legal de la UES, según lo expuesto en el mismo, el cual fue presentado el 28 de enero de este año.

En dicho informe, alegó en lo medular: i) que en la respuesta de la solicitud se detalló la nómina de miembros propietarios y suplentes de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas correspondiente a los periodos solicitados; ii) que en relación a los responsables de establecer la agenda para cada sesión de junta directiva, el proceso se realiza conforme al Art. 42 literal “c” del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad

de El Salvador; iii) que en relación a las memorias de labores solicitadas, dicha información se encuentra disponible al público en el portal de transparencia, así como las actas que corresponden a cada Junta Directiva para el período solicitado junto con la propuesta de agenda presentada, y que esta cuenta con la misma validez que la información original según lo establecido en el Art. 64 de la LAIP; iv) que la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas no cuenta con un presupuesto para economía de salarios, y que carece de un plan de acción para actualización de planes de estudio, por esa razón no se pudo proporcionar la información solicitada; v) que no entiende a que se refiere el solicitante al mencionar que la información que se le ha entregado es incompleta ya que se verificó la existencia de la misma en el portal de transparencia y le dieron a conocer de la inexistencia de la que no se entregó, según lo detallado en el romano anterior; vi) que a efecto de acreditar lo expuesto y para mayor orientación del ciudadano, anexó a su informe hojas impresas con capturas de pantalla con los pasos a seguir para ingresar al portal, señalando los enlaces correspondientes sobre la ubicación de la información generada y petitionada, lo cual solicita que se incorpore como prueba en el presente procedimiento; y vii) que en su calidad de rector aun siendo el máximo funcionario ejecutivo de la Universidad, el gobierno universitario se encuentra distribuido en distintas unidades, con competencias y facultades propias e indelegables de conformidad a la Ley Orgánica y la legislación Universitaria, y que será el Decano el Funcionario ejecutivo de la Facultad, quien represente, presida y dirija la facultad, y que como Rector de la Universidad no tiene bajo sus facultades adoptar medidas ejecutivas dentro de una facultad, por lo cual él no puede declarar en inexistencia o reserva una información, ni desclasificar aquella información que ha sido declarada reservada por las Juntas Directivas de las Facultades. Por último, solicitó que se le tenga por cumplido el requerimiento.

En razón de lo anterior, mediante auto de las nueve horas del veintidós de junio de dos mil veinte, se corrió traslado al apelante a efecto que se pronunciara respecto de las alegaciones realizadas por el ente obligado. Es así que, el 22 de julio de este año, el apelante evacuó el requerimiento, expresando su inconformidad en los siguientes términos (textualmente):

“Que reitero mi inconformidad respecto a la referencia que se hace al sitio web del Portal de Transparencia de la Facultad de Ciencias Económicas (<http://www.transparencia.fce.ues.edu.sv>), en el cual, el ente obligado asegura se encuentra



la información solicitada; sin embargo, como podrán observar el sitio, mediante una revisión técnica, el enlace no me refiere a los documentos solicitados, sino a un portal cuya interfaz no es amigable con el usuario, ni ofrece una orientación sobre cómo navegar por este; lo cual es una limitante a mi derecho de acceso a la información; además, en otro momento que he solicitado información pública a la Universidad de El Salvador, la unidad responsable en la resolución de orientación UAIP/RO01(20)/2020, me ha compartido el url específico del documento que he solicitado, lo que me ha permitido acceder a la información de forma eficaz. Así, debo observar que las copias poco legibles que se me comparten como una guía para el acceso a la información solicitada, no me permite acceder de forma eficaz a la información solicitada.

Que el IAIP puede verificar mediante un análisis de los archivos, si en efecto el ente obligado ha tenido la información actualizada, según le corresponde, porque es posible que la información oficiosa se haya generado a posterior de este proceso que se ventila en vuestra instancia. Así respecto las memorias de labores, tiene que haber un documento por año, según la obligación legal que se deriva del artículo 10 de la LAIP.

Que respecto a mi solicitud de tener acceso al Nombre y Cargo de los responsables de establecer la propuesta de agenda de las sesiones de JD (Junta Directiva) de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE), no se me ha dado respuesta concreta, pues no he solicitado la base legal para establecer la agenda de la Junta Directiva.

Que respecto a la argumentación de la autoridad obligada sobre no entender que significa mi solicitud cuando pido: 1) Listado y montos de las plazas que están generando economías de salarios en la Facultad de Ciencias Económicas, periodo Enero-Diciembre 2019; 2) Destino que se ha dado a las economías de salarios, distribuidas por montos y usos, en el periodo Enero-Diciembre 2019. Debo advertir, que nadie puede argumentar ignorancia, no obstante, el ente obligado cuenta con expertos en finanzas públicas para que pueda aclarar el significado del concepto economías salariales, así que me parece más un regateo para obstruir el acceso a la información; sin embargo, debo aclarar que tal como se entiende las economías de salarios se generan por aquellas partidas disponibles en la Ley de Salario, cuya plaza está vacante según se estipula en el acuerdo de refrenda de nombramiento de personal por ley salario de la Facultad de Ciencias Económicas. El ente obligado podrá leer en las

Disposiciones Generales del Presupuesto, en su apartado referido a la Universidad de El Salvador, que se alude a la economía de salarios, así que no es un concepto de uso arbitrario o del cual, un encargado de la administración pública puede alegar ignorancia.

Que respecto al alegato que hace el ente obligado, cuando afirma que la Junta Directiva no emite resoluciones, sino acuerdos, como una forma de eludir la responsabilidad de responder a mi solicitud en la que pido: 1) Cantidad de solicitudes pendientes de conocer por parte de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, periodo Enero-Diciembre 2019; 2) Cantidad de solicitudes que están pendiente de resolución por parte de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas; debo advertir que si bien es cierto que la Junta Directiva toma acuerdo para expresar los actos administrativos, también emite resoluciones como parte de la administración pública que desarrolla procedimientos de conformidad con la ley de procedimientos administrativos, cabe citar al Dr. Eduardo Gamero Casado, cuando afirma: "Como sabemos, el procedimiento administrativo es una sucesión de trámites que desembocan en una resolución final"; así también, la Junta Directiva como parte de la Administración Pública, emite actos administrativos o resoluciones, tal como se deduce de la lectura del artículo 16, numeral "6" cuando dice: "...Los ciudadanos también tendrán derecho a presentar recursos contra actos o resoluciones de la Administración Pública, de acuerdo con el ordenamiento jurídico", cabe decir que la ley antes referida, menciona en diversos artículos las resoluciones de la administración pública, de lo cual se puede comprender, que la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas no puede ignorar este contexto legal que condiciona su actuación; así por ejemplo, la ley se refiere a resoluciones que limitan derechos en su artículo 30 inciso final".

Finalmente, solicitó que se continúe con el trámite de ley.

El 22 de septiembre del corriente año, se llevó a cabo la audiencia oral del presente procedimiento, de manera virtual por medio de la plataforma "Meet" de Google, con la presencia del apelante y del ente obligado. En este acto, el señor rector de la UES designó como procurador del ente obligado al señor Nixon Rogelio Hernández, quien se desempeña como Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UES. Por otro lado, ninguna de las partes ofreció elementos probatorios durante la audiencia. Posteriormente, se otorgó a las partes la oportunidad para la realización de sus argumentos, etapa en donde ambas



reafirmaron sus posturas.

Análisis del caso

Previo a iniciar el respectivo examen, este Instituto tiene a bien indicar que el acceso a la información pública es un derecho constitucional implícito, es decir, no regulado expresamente en la Constitución (Cn). Sin embargo, este tiene una condición indiscutible de derecho fundamental surgida del derecho a la libertad de expresión, regulado en el artículo 6 de la Cn. Asimismo, este derecho comprende la facultad de buscar, recibir y difundir datos, ideas o informaciones de toda índole, pública o privada que tengan interés público.

De igual forma, se enmarca en el ámbito de las libertades individuales, aunque también tiene un carácter colectivo que adquiere relevancia para el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho, porque su ejercicio garantiza la transparencia y permite a las personas acceder libremente a la información en poder de las instituciones del Estado, como un mecanismo de control social a la gestión pública.

Para el caso en comento, tanto la oficial de información de la UES en su resolución, como lo alegado en el informe de Ley rendido el 28 de enero de este año y lo expuesto por el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, no se ha alegado alguna causal de restricción (como confidencialidad o reserva) de la información solicitada por el apelante, por lo que la naturaleza de esta información no está en discusión, teniendo claridad las partes involucradas que la misma es información pública y/o pública oficiosa.

En ese sentido, este Instituto ha determinado su pronunciamiento respecto de: *si la información objeto del presente recurso ya ha sido entregada al apelante en su totalidad o si la misma efectivamente ya se encuentra publicada en el portal de transparencia de la Institución (total o parcialmente)*. Por lo que el examen jurídico seguirá el orden lógico siguiente: **(I) Análisis del caso en concreto**; y, **(II) Consideraciones finales**.

I. Delimitado lo anterior, inicialmente debe recordarse que el objeto del presente procedimiento consiste en información con contenido diverso; por lo que cada requerimiento de información se analizará por separado, según detalle:

Requerimientos 1: *Plan de acción para la actualización de los planes de estudio de la FCE.*

Al respecto, según la nota de fecha 5 de diciembre de 2019, suscrita por el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Nixon Rogelio Hernández Vásquez (la cual consta a folio 11 del expediente administrativo que lleva el ente obligado), se estableció que: “[...] *se carece de un plan de acción para actualización de los planes de estudio; razón por la cual la información solicitada no puede ser proporcionada*” (itálicas suplidas). Dicho en otras palabras, el Decano ha expresado que no cuentan con un plan para la actualización de los planes de estudio de dicha facultad. En consecuencia, es oportuno ordenar al ente obligado que realice las gestiones pertinentes con la finalidad de ubicar dicho plan, o, que emita la respectiva declaratoria de inexistencia con relación a este requerimiento, pues no se puede ordenar la entrega de un plan que no existe, según lo expuesto por el Decano de la FCE.

Requerimiento 2: *Informe de avances en la actualización de los planes de estudio de la FCE.*

Este ítem se encuentra íntimamente relacionado al anterior (requerimiento 1). No obstante, si bien la FCE ha establecido que no cuentan con un “plan” para la actualización de los planes de estudio de la referida facultad, ello no le exime de brindar respuesta al apelante respecto de este punto, puesto que mediante el informe solicitado el ente obligado puede exponer cuál es el escenario actual o progreso de las gestiones que se han realizado para la actualización de los planes de estudio, o, a *contrario sensu*, explicar por qué no se han realizado dichas gestiones. Asimismo, se podría ampliar en este punto el motivo por el cual no cuentan con el plan al que se hizo referencia en el requerimiento 1, ya sea porque no ha sido generado o por alguna otra causa.

Requerimiento 3: *Plan de desarrollo de la FCE.*

Con relación a este requerimiento, el apelante señaló durante la audiencia oral que el ente obligado omitió pronunciarse con relación a dicho plan en la resolución recurrida. Por su parte, el Decano de la FCE afirmó durante la audiencia oral que dicha facultad “no genera un plan de desarrollo”.

Al respecto, el apelante citó el art. 44 letra “c” del Reglamento de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, el cual establece que: “*Otras Atribuciones y deberes De la*



Asamblea del Personal Académico, Art. 44. - Además de lo establecido en el art. 35 de la Ley Orgánica, corresponden a la Asamblea de Personal Académico, las siguientes atribuciones y deberes: [...] c) Evaluar anualmente la ejecución operativa del Plan de Desarrollo Estratégico de la Facultad”.

En línea con lo anterior, este Instituto advierte lo dispuesto en el art. 43 del citado reglamento, a saber: “*De la Asamblea del Personal Académico*, Art. 43. - En cada Facultad habrá una Asamblea de Personal Académico, integrada por los Docentes que reúnen los requisitos del Art. 46 de la Ley Orgánica y lo establecido en el Reglamento de Escalafón en lo relativo al Personal Académico, los investigadores y los encargados de la Proyección Social que cumplan los requisitos para ser docentes. La Asamblea del Personal académico, será el máximo organismo asesor y consultivo de la JD y del Comité Técnico Asesor, así como también elector de sus representantes ante los órganos de gobierno de la Universidad. Cuando ejerza las funciones electorales se registrá de conformidad a la Ley Orgánica y al Reglamento Electoral”.

Bajo esa lógica, es claro que cada Facultad de la UES tiene un Plan de Desarrollo Estratégico, o al menos debería tenerlo, puesto que tienen la obligación legal de emitirlo, y en consecuencia, nos encontramos ante información que la FCE debe generar. Por tanto, de conformidad al art. 2 de la LAIP, es oportuno que la FCE realice las gestiones para ubicar dicho plan dentro de las dependencias internas de esa Facultad, a fin de que este sea entregado al solicitante. En caso que el mismo no haya sido generado, deberán declarar su inexistencia de conformidad al art. 73 de la LAIP.

Requerimiento 4: Memoria de labores de la FCE, período 2015-2019.

Con relación a este punto, el ente obligado afirmó a lo largo del presente procedimiento que las mismas se encuentran ya publicadas en el portal de transparencia de la FCE. Por su parte, el apelante señaló que no encontró dicha información en el portal puesto que el mismo no es “amigable con el ciudadano”; es decir, que resulta complicado acceder a la misma.

El ente obligado, como contraargumento, indicó que al informe de Ley se adjuntaron capturas de pantalla para orientar al peticionario en que parte del portal se encuentran publicados.

Al respecto, este Instituto ha realizado la búsqueda de las memorias de labores correspondientes al período 2015-2019, misma que se efectuó siguiendo los pasos plasmados en los anexos del informe de Ley en un primer momento, dando como resultado que no se pudo acceder a dicha información; por consiguiente, se procedió a explorar el portal, encontrando un documento denominado “Memoria de Gestión 2015-2019”, el cual puede ser consultado por el peticionario a través del siguiente enlace: <http://transparencia.fce.ues.edu.sv/uploads/pdf/memoria-2015-2019.pdf>¹. En tal sentido, se concede por medio de esta resolución el acceso al documento requerido por el apelante; no obstante, se hace la salvedad que es un solo documento que recopila la gestión del período solicitado, más no se encuentra publicado una memoria de labores por año.

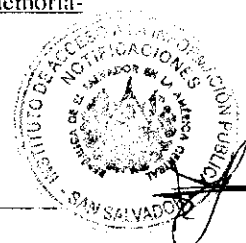
Requerimiento 5 y 6: “Listado y montos de las plazas que están generando economías de salarios en la FCE, período enero-diciembre de 2019”, y, “Destino que se ha dado a las economías de salarios, distribuidas por montos y usos, en el período de enero-diciembre de 2019”.

Sobre estos requerimientos, por medio de la ya citada nota de fecha 5 de diciembre de 2019, (folio 11 del expediente administrativo que lleva el ente obligado), el Decano señaló que: “[...] Para finalizar, es necesario mencionar que la Facultad de Ciencias Económicas no cuenta con una línea presupuestaria para economía de salarios” (itálicas suplidas); argumento que fue ratificado por el mismo Decano de la FCE durante la audiencia oral del caso, y también por el Rector en funciones que rindió el informe de defensa.

Al respecto, el artículo 3 de las Disposiciones Generales del Presupuesto regulan específicamente para la Universidad de El Salvador, las economías de salarios, a saber:

“Art. 3.- La distribución de cuota y ajuste entre clases generales, tanto en asignaciones como en cuota, dentro de una misma unidad de organización, será autorizada por el Rector o el Gerente, conforme a las necesidades de cada unidad. Las transferencias de asignaciones y cuotas entre clases generales de una misma unidad, serán autorizadas por el Consejo Superior Universitario, a propuesta del Rector o de las Juntas Directivas en el caso de las Facultades. Las transferencias de asignaciones y cuotas entre distintas unidades incluyendo las

¹ Consultado el 6 de noviembre de 2020, en: <http://transparencia.fce.ues.edu.sv/uploads/pdf/memoria-2015-2019.pdf>



economías de salarios serán autorizados por la Asamblea General Universitaria previo dictamen del Gerente de la Universidad. Toda transferencia, incluyendo la que utilice economías de salarios, deberá hacerse únicamente para atender gastos urgentes y sin dejar descubierto todo compromiso o gasto que deba atenderse ineludiblemente en el ejercicio fiscal, como aguinaldos, salarios por contrato, etc. Las transferencias acordadas, para que surtan efecto, deberán ser aprobadas por el Poder Ejecutivo en el Ramo de Hacienda”.

Entonces, las economías salariales se constituyen de aquel sobrante de salarios no pagados al final del período fiscal, pero que sí fue presupuestado. Esa cantidad no pagada en salarios puede ser utilizada para atender o cubrir otros gastos indispensables que deban ser atendidos.

En tal sentido, el argumento planteado por el Decano de la FCE de que “no cuentan con una línea o un presupuesto” para economías de salarios ha quedado desvirtuado, en razón que este monto no es en sí una partida presupuestaria previamente asignada, sino que la misma surge de todos aquellos salarios que se dejan de pagar por el motivo que se trate: plazas vacantes, categorías salariales, etc. Por tanto, es oportuno que la FCE entregue el detalle solicitado por el apelante para el año 2019. En caso que no se hubiese constituido economía salarial para el año 2019, deberán declarar su inexistencia de conformidad al art. 73 de la LAIP.

Requerimiento 7: Nombre y cargo de los responsables de establecer la propuesta de agenda de las sesiones de Junta Directiva de la FCE.

Con relación a este punto, sobre los responsables de establecer la propuesta de Agenda para cada sesión de Junta Directiva, el ente hizo del conocimiento del apelante – mediante la nota de fecha 5 de diciembre de 2019, ya citada – que este proceso se realiza conforme a lo establecido en el Artículo 42, literal c), del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador.

No obstante, el apelante se mostró inconforme (tanto en el escrito de inconformidad remitido el 22 de julio de este año como durante la audiencia oral respectiva) señalando que no ha solicitado base lega sino que el nombre y cargo de los responsables de establecer la propuesta de agenda de las sesiones de Junta Directiva de la FCE.

Como contraargumento, el Decano de la FCE señaló que el apelante no indicó el período de tiempo respecto del cual solicitaba dichos datos, por lo que no era posible brindar nombres en concreto puesto que dependerá del período que se solicite determinar quiénes son o fueron los responsables de establecer la propuesta de agenda para las sesiones de Junta Directiva; y el cuanto al cargo, indicó que de siempre de conformidad al art. 42 letra “c” le corresponde a quienes ostenten el cargo de Secretario y el Decano de cada Facultad de Ciencias Económicas.

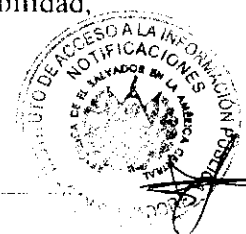
Al respecto, si bien el ente obligado omitió prevenir al solicitante con relación a este requerimiento, se advierte de la redacción del mismo que en su momento fue planteado en “tiempo presente”, por lo que es válido interpretar que se está pidiendo el nombre de los responsables a la fecha en que fue interpuesta su solicitud de información, es decir, el 29 de noviembre de 2019. En consecuencia, es procedente ordenar al ente obligado que entregue el nombre de los servidores públicos a los que se refiere el art.42 literal “c” Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador.

Requerimiento 8: *Copia de las convocatorias y agendas propuestas para las sesiones de JD de la FCE para el período de enero-diciembre de 2019.*

En relación a este requerimiento, el ente obligado mediante el informe de ley, orientó al ciudadano a buscar la información en el portal de transparencia de la FCE, accesible en la dirección: transparencia.fce.ues.edu.sv. Al respecto, el apelante ha manifestado su inconformidad en cuanto a la dificultad de que le presenta buscar la información solicitada en todo el portal de transparencia, cuando había solicitado la remisión por medios electrónicos como forma de entrega.

Al respecto, debe tomarse en cuenta que la remisión a los repositorios en línea en los que se pueda consultar la información en una herramienta a disposición de los entes obligados, para que puedan, de forma activa y proactiva, poner a disposición del público la información de interés general de tal forma que se potencie el debido acceso a la información de los particulares a través de un procedimiento más expedito.

Sin embargo, para lograr este objetivo no pueden desatenderse las mismas reglas aplicables a otras formas de entrega de la información. En consecuencia, aunque se remita al solicitante a consultar un sitio web, en concordancia con los principios de disponibilidad,



sencillez e integridad, regulados en el Art. 4 de la LAIP, es obligación del ente señalar con precisión el lugar en donde puede consultarse la información, y asegurarse que esta se encuentre completa, accesible y sea veraz.

En lo relativo al caso, es un hecho notorio, dotado de publicidad y de acceso al público que la UES posee un portal de transparencia. El ente, como parte de los anexos del informe de Ley rendido por el Rector en funciones de la UES, mismo argumento señalado por el Decano de la FCE durante la audiencia oral, constan unas capturas de pantalla como una guía para el apelante para que pudiese acceder a la información solicitada. Al respecto, este Instituto ha seguido los mismos, no encontrando la información solicitada, específicamente las convocatorias y agendas propuestas para las sesiones de Junta Directiva (requerimiento 8). En ese orden, se ha podido verificar que esta documentación no se encuentra publicada en el portal de transparencia de la FCE, no obstante, el ente obligado remitió al apelante al apartado de las Actas² de acuerdos de Junta Directiva cargadas en el portal, pero estas no están clasificadas por año ni se encuentran cargadas en orden correlativo; tampoco existe alguna guía o nota aclaratoria que le indique a los usuarios cuantas actas se generaron por año, a efecto de poderse verificar si todas han sido publicadas.

Aunado el anterior, el Decano de la UES durante la audiencia oral mencionó que este requerimiento puede evacuarse al leer las Actas del período solicitado. No obstante lo anterior, como es sabido, hay una clara diferencia entre la convocatoria y propuesta de agenda que se presenta a los miembros de cualquier ente colegiado y el Acta que contiene los acuerdos, puesto que en las Actas consta ya la agenda aprobada.

En razón de lo anterior, se ordenará oportunamente que la FCE entregue la documentación en donde se realiza las convocatorias con la propuesta de agenda de las sesiones de la Junta Directiva para el período solicitado.

Requerimiento 9 y 10: “Cantidad de solicitudes pendientes de conocer por parte de la Junta Directiva de la FCE, para el período de enero-diciembre de 2019” y “Cantidad de solicitudes que están pendiente de resolución por parte de Junta Directiva de la FCE, para el período de enero-diciembre de 2019”.

² Consultado el 6 de noviembre de 2020: <http://transparencia.fce.ues.edu.sv/index.php/documentos-junta-directiva/sesiones>

63

Con relación a estos requerimientos, el Decano de la FCE argumentó mediante la nota suscrita por él mismo en fecha 5 de diciembre de 2019 (folio 11 del expediente administrativo remitido), a saber: *"Así mismo, a usted informo que la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas no emite ningún tipo de resolución"* (itálicas suplidas). Aunado a lo anterior, sostuvo durante la audiencia oral que no comprendía a qué tipo de solicitudes se refería el apelante, puesto que la Junta Directiva de la FCE solo emite acuerdos.

Al respecto, debe afirmarse que el ejercicio del derecho de acceso a la información, al igual que el resto de la actividad administrativa, se encuentra sometido a una serie de principios que delimitan el ámbito del ejercicio de las funciones de las instituciones en protección de los derechos de los particulares. Al procedimiento del acceso a la información particularmente le resultan aplicables, entre otros, los principios de antiformalismo, eficacia y el de buena fe.

El principio de antiformalismo se encuentra regulado en el Art. 3 número 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), de acuerdo con este principio la administración se encuentra obligada a realizar interpretaciones sobre los requisitos a cumplir por los administrados, con el fin de garantizar el acceso a los procedimientos y su resolución satisfactoria. Por su parte, el principio de eficacia, establecido en el Art. 3 número 4 de la LPA, establece la obligación de la administración de subsanar de oficio, incluso sin prevenir al solicitante, de todos aquellos defectos advertidos en los requerimientos de los particulares, la que se confirma con lo dispuesto en el Art. 15 del mismo cuerpo normativo. De igual forma, el principio de buena fe se encuentra establecido en el Art. 3 número 9 de la LPA, y este dispone que la Administración deberá ser conducida de forma honesta y leal.

En virtud de los principios antes descritos, se infiere la obligación de las instituciones, para atender todas las solicitudes de información con orientación a la satisfacción de los derechos de los particulares, por encima de las formalidades procesales, pues ningún administrado tiene la obligación de conocer a detalle el funcionamiento interno de los entes públicos, y este elemento no puede ser exigible como requisito para satisfacer su derecho de acceso a la información pública.

En consecuencia, las instituciones deben suplir los errores en que incurran los solicitantes, o, en su defecto, realizar las prevenciones a fin de sanear los requerimientos



antes de incurrir en afectaciones a los derechos de los particulares. Asimismo, esto implica evitar cualquier situación que pudiera hacer incurrir al solicitante en un error para posteriormente aprovecharse de este en detrimento de sus derechos o de los efectos del procedimiento que se pretende.

En aplicación al caso en conocimiento, el ente obligado prescindió tanto del saneamiento oficioso de la pretensión, como de la realización de prevenciones sobre la solicitud, y posteriormente, fundamentó su argumento en no tener claridad sobre lo solicitado por el apelante en estos requerimientos (9 y 10). La actuación antes descrita constituye una grave inobservancia a la normativa vigente para el procedimiento de acceso a la información que no resulta compatible con el principio de buena fe.

No obstante lo anterior, al no contarse con más elementos que puedan ilustrar a este ente colegiado a delimitar o dilucidar concretamente a qué tipo de “solicitudes y resoluciones” concretas se refiere el apelante, resulta procedente ordenar al ente obligado que realice las gestiones internas a fin de dar respuesta al solicitante, o en su defecto, declare la inexistencia de la misma de conformidad al art. 73 de la LAIP.

Requerimiento 11: *Nómina de Miembros Propietarios y Suplentes de la Junta Directiva de la FCE de los periodos 2017-2019 y 2019-2021.*

Al respecto, se advierte que la información correspondiente a este requerimiento ha sido entregada por el ente obligado por medio de la nota de fecha 5 de diciembre de 2019, suscrita por el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Nixon Rogelio Hernández Vásquez, la cual consta a folio 11 del expediente administrativo que lleva el ente obligado; y mediante nota de fecha 22 de enero de 2020, suscrita por el ya referido Decano (folio -- del presente expediente). De igual forma, el apelante expresó durante la audiencia oral que en efecto ya ha sido entregado este requerimiento. En tal sentido, es oportuno sobreseer el procedimiento con relación a este punto.

II. De acuerdo al análisis y valoraciones realizadas por este ente colegiado sobre la causa que nos ocupa, la información solicitada por el apelante constituye información oficiosa en los términos establecidos en el Art. 10 de la LAIP y el Lineamiento 2 para la Publicación de Información oficiosa (emitido por este Instituto). En virtud de lo anterior, este Instituto no cuenta con los elementos suficientes para determinar que la información se

encuentra publicada de forma completa en el sitio web al que fue referido el solicitante. Por lo que, considerando que el ente obligado no ha aportado elementos probatorios orientados a demostrar la completitud de la información solicitada por el apelante, en aplicación del principio de máxima publicidad establecido en el Art. 4 letra "a" y 5 de la LAIP, corresponde ordenarle a la UES lo siguiente:

- a) Realice las gestiones internas para entregar al apelante, la información de los requerimientos 2 y 7, consistentes en: "Informe de avances en la actualización de los planes de estudio de la FCE" y "Nombre y cargo de los responsables de establecer la propuesta de agenda de las sesiones de Junta Directiva de la FCE".
- b) Realice las gestiones internas para ubicar y entregar al apelante, la información de los requerimientos: 1, 3, 5, 6, 8, 9 y 10, consistentes en: "Plan de acción para la actualización de los planes de estudio de la FCE", "Plan de Desarrollo Estratégico de la FCE", "Listado y montos de las plazas que están generando economías de salarios en la FCE, período enero-diciembre de 2019", "Destino que se ha dado a las economías de salarios, distribuidas por montos y usos, en el período de enero-diciembre de 2019", "Copia de las convocatorias y agendas propuestas para las sesiones de JD de la FCE para el período de enero-diciembre de 2019", y, "Cantidad de solicitudes que tienen pendientes de conocer y pendientes de resolución por parte de la Junta Directiva de la FCE, para el período de enero-diciembre de 2019"; por ser información pública, y por existir la obligación legal de generarla por parte de cada Facultad de la UES de conformidad al Reglamento de la Ley principal.

Por último, este Instituto estima oportuno declarar el sobreseimiento del presente procedimiento respecto de los requerimientos 4 y 11, consistentes en: "Memoria de labores de la FCE, período 2015-2019", y, "Nómina de Miembros Propietarios y Suplentes de la Junta Directiva de la FCE de los períodos 2017-2019 y 2019-2021", por los motivos expuestos en la presente providencia.

Por otro lado, es pertinente aclarar que las declaratorias de inexistencia que se pudiesen generar en relación a los requerimientos solicitados por el apelante deben estar debidamente fundamentadas, de otra forma, las mismas podrían evidenciar el no



cumplimiento de la obligación legal de documentar la función que desempeña dicha Facultad por parte de los servidores públicos de que se trate.

Decisión del caso

Por lo tanto, de conformidad con las razones antes expuestas, y con base en las disposiciones legales citadas y en los Arts. 2, 6, 18 y 85 y 86 de la Cn., y 94, 96 letra “d” y 102 de la LAIP, este Instituto **resuelve**:

a) Sobreseer el presente procedimiento respecto a los requerimientos 4 y 11, descritos en el preámbulo de la presente resolución.

b) Modificar la resolución emitida por la oficial de información de la Universidad de El Salvador venida en apelación, por los motivos expuestos en la presente providencia.

c) Ordenar a la **Universidad de El Salvador** que, a través de su máxima autoridad o titular, obligación extensible al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, que en el plazo de **10 días hábiles** contado a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, entregue a **Santos Fredis Pereira Joya** la información de los requerimientos 2 y 7, consistentes en: *i) Informe de avances en la actualización de los planes de estudio de la FCE*”, y, *“Nombre y cargo de los responsables de establecer la propuesta de agenda de las sesiones de Junta Directiva de la FCE”*, en los términos expresados en esta resolución en el apartado **“Análisis del caso”**.

d) Ordenar a la **Universidad de El Salvador** que, a través de su máxima autoridad o titular, obligación extensible al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, que dentro del mismo plazo descrito en el literal que antecede, realice las gestiones internas para ubicar y entregar al apelante **Santos Fredis Pereira Joya**, la información de los requerimientos: 1, 3, 5, 6, 8, 9 y 10, consistentes en: *“Plan de acción para la actualización de los planes de estudio de la FCE”*, *“Plan de Desarrollo Estratégico de la FCE”*, *“Listado y montos de las plazas que están generando economías de salarios en la FCE, período enero-diciembre de 2019”*, *“Destino que se ha dado a las economías de salarios, distribuidas por montos y usos, en el período de enero-diciembre de 2019”*, *“Copia de las convocatorias y agendas propuestas para las sesiones de JD de la FCE para el período de enero-diciembre de 2019”*, y, *“Cantidad de solicitudes que tienen pendientes de conocer y pendientes de resolución por*

67

parte de la Junta Directiva de la FCE, para el período de enero-diciembre de 2019”; en los términos expresados en esta resolución en el apartado “Análisis del caso”.

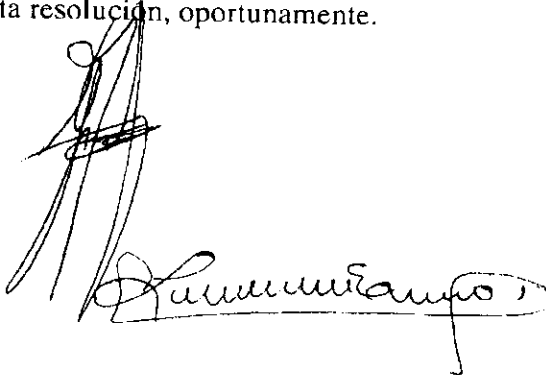
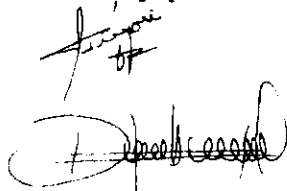
d) **Ordenar** a la **Universidad de El Salvador** que, dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo establecido en literal anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de las obligaciones contenidas en los literales “b)” y “c)” de esta parte resolutive, el cual incluya un acta en la que conste la documentación entregada al apelante, así como su recepción; bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio y la ejecución forzosa de conformidad al Art. 167 y 32 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

e) **Remitir** el presente expediente a la **Unidad de Cumplimiento** de este Instituto para verificar la eficacia de esta resolución.

f) **Hacer saber** a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, de conformidad con el Art. 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativo, si así se considerase necesario.

g) **Publíquese** esta resolución, oportunamente.

Notifíquese.-



PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN

JH/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil veinte.


José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP

